

Ponencia presentada por el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia



"Las niñas, niños y los jóvenes cuentan: situación de sus derechos en el marco del informe "Una mirada a las afectaciones que genera el conflicto armado en la vida de la niñez y la juventud en el Huila"

Por: Rosa Liliana Ortiz Perdomo, Directora OBSURDH

Gracias a la Corporación jurídica Humanidad Vigente, el departamento del Huila recibe el proyecto **"ACCION PARA LA PREVENCION DE LAS VIOLACIONES EN LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y OTRAS AFECTACIONES EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO"**, como una oportunidad frente a un campo poco explorado en la región. Hablar de los derechos de este sector poblacional ha permitido incluir en agendas organizativas esta temática, así como mejorar la capacidad de observar y documentar información, casos y situaciones relacionadas con los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.

Las afectaciones por el conflicto a niños y jóvenes no es independiente de las afectaciones al resto de los grupos poblacionales y a los demás miembros de sus familias, en sus 7 años

de existencia, el Observatorio de Derechos Humanos ha registrado violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH en el marco del conflicto armado contra menores de 18 años, como desplazamiento, amenazas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, víctimas de minas y municiones sin explotar, ataques indiscriminados, detenciones arbitrarias, abuso sexual y reclutamiento forzado por parte de la insurgencia y mediante las batidas ilegales por el Ejército Nacional.

El Huila continúa siendo un escenario de confrontación armada en constante presión por la presencia de actores armados en especial en las fronteras del departamento y una estrategia de blindaje de la Fuerza Pública de las principales áreas urbanas y del Huila en general, de la presencia de la insurgencia de las Farc. Se percibe un alto nivel de represión y abuso de autoridad por parte de las autoridades, que viola libertades individuales de quienes participan en las protestas campesinas e indígenas y de los jóvenes que continúan siendo vulnerados en las abundantes batidas que se realizan a lo largo y ancho del departamento.

Las batidas ilegales del Ejército son una de las afectaciones a los derechos Humanos que más agrede a la población joven del departamento, municipios como Pitalito, San Agustín, Isnos, La plata, Algeciras y Neiva, son los que más denuncian estas violaciones a los derechos humanos. Si bien es cierto en Colombia no se ha podido desmontar el servicio militar obligatorio, el procedimiento de las batidas quedó prohibido según lo ha determinado la sentencia 879 del 2011, ya que configura una detención arbitraria y se caracteriza por intrato indigno a los jóvenes. Casos como el ocurrido el 12 de septiembre en el municipio de Pitalito, cuando uniformados adscritos al Batallón de Infantería No 27 Magdalena del Ejército Nacional realizaron detenciones arbitrarias contra jóvenes que al no tener definida su situación militar fueron conducidos en un camión hacia el distrito militar 56 para ser sometidos a exámenes e iniciar su reclutamiento. "En desarrollo de la labor de observación la Defensoría del Pueblo logró constatar cómo se pretendía reclutar a un joven quien padecía de epilepsia, un estudiante de un instituto técnico y un desplazado con amputación de uno de sus dedos en su mano derecha."

El sur del Huila presenta grandes riesgos para la población de menores de 18 años, el conflicto armado, el narcotráfico, la pobreza, el desplazamiento, la presencia de diferentes actores armados y el haberse constituido en un corredor estratégico del narcotráfico hacia el pacífico, hace de municipios como Isnos y Pitalito el de mayor tasa de víctimas del conflicto en el departamento; homicidios y amenazas rondan a la población siendo los jóvenes la población más afectada.

El reclutamiento forzado por parte de grupos ilegales aunque aparentemente ha disminuido continúa siendo un factor de riesgo para los niños y jóvenes en especial de las áreas rurales. También lo es la estrategia de militarización de la vida civil que enfoca su atención en los jóvenes y niños. Un ejemplo de esto sucedió el 3 de abril de este año cuando con un desfile por las principales calles del municipio de Palestina, se realizó el lanzamiento de la estrategia, "Niños y jóvenes conectados a lo bien", programa de intervención colectiva. Según sus gestores esta estrategia tiene como fin evitar el reclutamiento de menores de edad en las filas de grupos irregulares, sin embargo involucran de manera directa a los niños y jóvenes en actividades cívico militares que ponen en riesgo a la población civil, infringiendo el Derecho Internacional Humanitario.

El conflicto impacta con gran fuerza en los campos y veredas, un ejemplo preocupante lo encontramos en la vereda Rio Blanco del municipio de Baraya, Huila donde se han presentado una serie de hechos que ponen en riesgo la vida e integridad de los niños, niñas, adolescentes y campesinos de la región. Frente a los constantes bombardeos, los niños ya no quieren ir a la escuela y presentan afectaciones psicosomáticas como dolor de cabeza, dermatitis y trastornos del sueño y la alimentación. La docente del Centro Educativo las Perlas Sede Rio Blanco, ha manifestado su preocupación por la alarmante deserción escolar, los niños expresan su realidad en el juego y plasman en el mismo sus más grandes temores relacionados con el miedo a perder a su familia por el conflicto armado, temen a los militares del Ejército colombiano que persiguen y señalan a los campesinos como guerrilleros, incluso han usado a los niños para intentar inculpar a sus mismos padres. La problemática no ha sido escuchada por las autoridades, en los dos últimos años tres cuartas partes de los niños se han desplazado con sus familias de la región.

Frente a esta problemática el estado colombiano carece de estrategias efectivas que promuevan la paz y la reconciliación en zonas de conflicto donde la única presencia estatal la representa una fuerza pública hostil y estigmatizadora, desconociendo el impacto que tiene para los campesinos el pertenecer a regiones donde ha tenido presencia histórica los grupos insurgentes. Presencia estatal con programas sociales, desarrollo de vías, inversión al campo y la implementación de un modelo pedagógico diferente para niños y jóvenes campesinos, son algunas de las propuestas que urgen para saldar la deuda con quienes se resisten a abandonar sus fincas a pesar de encontrarse en medio del fuego cruzado.